

Plaza pública

para la edición del 17 de noviembre de 1995

Otra política

Miguel Ángel Granados Chapa

El secretario de Hacienda acudirá hoy a la Cámara de Diputados a explicar y defender la política económica del gobierno. Ya estuvo allí el martes, pero sólo presentó los criterios generales de esa política. En las próximas horas, en cambio, deberá responder a los cuestionamientos (en el sentido estricto de la palabra, que va más allá de la pregunta simple) que la oposición entera le asestará, y de los que no se desligarán muchos legisladores pertenecientes al mismo partido que el doctor Guillermo Ortiz (pues su ficha oficial asegura que es miembro del PRI desde 1965).

Se ha iniciado así el proceso legislativo de aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, los ejes de las finanzas públicas, que a su vez son uno de los elementos principales de la política económica. Dada la gravedad de la situación presente, que se deteriora por horas, ante la impasibilidad de los funcionarios públicos (que suponen que todos están locos, menos ellos), el Congreso, y especialmente la Cámara de Diputados, pueden elevarse por primera vez hasta la altura de sus responsabilidades.

En Washington, la tensión permanente entre la Casa Blanca y el Capitolio ha llevado a Estados Unidos a una delicada situación, en que el presupuesto federal para el

año próximo no ha sido aprobado. Más con propósitos propagandísticos que por verdadera imposibilidad de atender sus funciones, muchas oficinas gubernamentales norteamericanas han cerrados sus puertas, o disminuido el ritmo de su trabajo al mínimo necesario. El Presidente Clinton y las cámaras de senadores y representantes, no concordaron en el monto y el sentido del presupuesto antes de que empezara el año fiscal 1996, que debió iniciarse el primero de octubre. La prórroga automática de cuarenta y cinco días no sirvió para que fructificara la negociación respectiva, y allí está la administración padeciendo vergüenzas, sin dinero para enfrentar sus obligaciones cotidianas, porque sólo puede ejercerse un plan de gasto aprobado por el Congreso. No ha entrado el gobierno en suspensión de pagos frente a sus acreedores porque los vencimientos del miércoles fueron previstos, pero si la situación se prolonga (lo que no es sostenible) aun el peor enemigo de la moratoria incurriría en ella involuntariamente.

No digo, por supuesto, que este atascamiento, este conflicto extremo entre poderes sea el tipo de relación óptima entre el Ejecutivo y el legislativo. Para el entendimiento cabal de las condiciones norteamericanas, además, no debe perderse de vista la peculiaridad de su sistema político bipartidario, y el presente predominio de la oposición republicana en ambas cámaras. Aunque a una sensibilidad social aguda repugna la astringencia presupuestal de los republicanos, su posición es plausible porque no se limitan a acatar la propuesta presidencial. Lo que en este lance parlamentario queda

en relieve es la capacidad de cogobierno del poder legislativo, su capacidad para decidir, y no sólo matizar, las acciones gubernamentales. Algo como esa conducta (naturalmente sin pretender que lleguemos al punto en que hoy se encuentra la Casa Blanca) es lo esperable del Congreso mexicano, ya que la administración financiera gubernamental, con el Presidente Zedillo a la cabeza, persiste en la aplicación de una política que cada día muestra con mayor claridad sus deficiencias y peligros.

Donde quiera que uno vuelva la cara, no observa más que estragos de esa atroz combinación que es la crisis y los remedios gubernamentales contra ella. El alza de las tasas bancarias hasta el setenta por ciento, por ejemplo, es el acontecimiento más reciente en la interminable cadena de golpes a la economía productiva. Con los altos intereses que ahora se aplicarán a los créditos, no habrá clientela que quiera y pueda obtener financiamiento de ninguna especie, y se achicará cada vez más la actividad productiva. Y los bancos irán viendo mermar sus operaciones, disminución que se agrega al todavía insoluto problema de la cartera vencida, todo lo cual pone en riesgo al sistema de intermediación financiera, pese a los subsidios y cuidados con que se le mimó. Por supuesto, no se nos oculta la necesidad de ofrecer incentivos al capital para que no termine de irse o de resguardarse fuera de los ciclos productivos. Por eso es quizá inevitable el alza de las tasas. Pero ella es sólo un efecto de otras causas que han sido manejadas con arreglo a intereses foráneos

mezclados con un credo económico asumido dogmáticamente, y que es lo que debe corregirse.

El Congreso de la Unión ha sido tradicionalmente mera caja de resonancia de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ante la urgencia de esta hora, debe dejar de serlo. Si seguimos como vamos, no mejorarán las variables de la macroeconomía y en el terreno de los hechos, en la economía real, se acelerarán los factores de la descomposición. Alguien tiene que evitarlo. Los diputados deben frenar una política que genera efectos letales, plenamente comprobables, y propiciar la adopción de medidas alternativas, que siquiera sirvan para no reiterar actitudes y conductas que ya mostraron su ineffectividad. Allá se los haya si no identifican su responsabilidad y la ejercen a plenitud.

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Otra política

Sin tener que poner frente a las cuerdas a su adversario, como han hecho los republicanos al presidente Clinton, los diputados mexicanos están hoy ante la exigencia de contribuir a que haya una nueva política económica, que alivie y no cause estragos.



EL SECRETARIO DE HACIENDA ACUDIRÁ HOY A LA Cámara de Diputados a explicar y defender la política económica del gobierno. Ya estuvo allí el martes, pero sólo presentó los criterios generales de esa política. En las próximas horas, en cambio, deberá responder a los cuestionamientos (en el sentido estricto de la palabra, que va más allá de la pregunta simple) que la oposición entera le asestará, y de los que no se desligarán muchos legisladores pertenecientes al mismo partido que el doctor Guillermo Ortiz (pues su ficha oficial asegura que es miembro del PRI desde 1965).

Se ha iniciado así el proceso legislativo de aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, los ejes de las finanzas públicas, que a su vez son uno de los elementos principales de la política económica. Dada la gravedad de la situación presente, que se deteriora por horas, ante la impasibilidad de los funcionarios públicos (que suponen que todos están locos, menos ellos), el Congreso, y especialmente la Cámara de Diputados, pueden elevarse por primera vez hasta la altura de sus responsabilidades.

En Washington, la tensión permanente entre la Casa Blanca y el Capitolio ha llevado a Estados Unidos a una delicada situación, en que el presupuesto federal para el año próximo no ha sido aprobado. Más con propósitos propagandísticos que por verdadera imposibilidad de atender sus funciones, muchas oficinas gubernamentales norteamericanas han cerrado sus puertas, o disminuido el ritmo de su trabajo al mínimo necesario. El presidente Clinton y las Cámaras de Senadores y Representantes, no concordaron en el monto y el sentido del presupuesto antes de que empezara el año fiscal 1996, que debió iniciarse el primero de octubre. La prórroga automática de cuarenta y cinco días no sirvió para que fructificara la negociación respectiva, y allí está la administración padeciendo vergüenzas, sin dinero para enfrentar sus obligaciones cotidianas, porque sólo puede ejercerse un plan de gasto aprobado por el Congreso. No ha entrado el gobierno en suspensión de pagos frente a sus acreedores porque los vencimientos del miércoles fueron previstos, pero si la situación se prolonga (lo que no es sostenible) aun

el peor enemigo de la moratoria incurriría en ella involuntariamente.

No digo, por supuesto, que este atascamiento, este conflicto extremo entre poderes sea el tipo de relación óptima entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para el entendimiento cabal de las condiciones norteamericanas, además, no debe perderse de vista la peculiaridad de su sistema político bipartidario, y el presente predominio de la oposición republicana en ambas cámaras. Aunque a una sensibilidad social aguda repugna la astringencia presupuestal de los republicanos, su posición es plausible porque no se limitan a acatar la propuesta presidencial. Lo que en este lance parlamentario queda en relieve es la capacidad de cogobierno del Poder Legislativo, su capacidad para decidir, y no sólo matizar, las acciones gubernamentales. Algo como esa conducta (naturalmente sin pretender que llegemos al punto en que hoy se encuentra la Casa Blanca) es lo esperable del Congreso mexicano, ya que la administración financiera gubernamental, con el presidente Zedillo a la cabeza, persiste en la aplicación de una política que cada día muestra con mayor claridad sus deficiencias y peligros.

Donde quiera que uno vuelva la cara, no observa más que estragos de esa atroz combinación que es la crisis y los remedios gubernamentales contra ella. El alza de las tasas bancarias hasta el setenta por ciento, por ejemplo, es el acontecimiento más reciente en la interminable cadena de golpes a la eco-

nomía productiva. Con los altos intereses que ahora se aplicarán a los créditos, no habrá clientela que quiera y pueda obtener financiamiento de ninguna especie, y se achicará cada vez más la actividad productiva. Y los bancos irán viendo mermar sus operaciones, disminución que se agrega al todavía insoluto problema de la cartera vencida, todo lo cual pone en riesgo al sistema de intermediación financiera, pese a los subsidios y cuidados con que se le mimó. Por supuesto, no se nos oculta la necesidad de ofrecer incentivos al capital para que no termine de irse o de resguardarse fuera de los ciclos productivos. Por eso es quizá inevitable el alza de las tasas. Pero ella es sólo un efecto de otras causas que han sido manejadas con arreglo a intereses foráneos mezclados con un credo económico asumido dogmáticamente, y que es lo que debe corregirse.

El Congreso de la Unión ha sido tradicionalmente mera caja de resonancia de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ante la urgencia de esta hora, debe dejar de serlo. Si seguimos como vamos, no mejorarán las variables de la macroeconomía y en el terreno de los hechos, en la economía real, se acelerarán los factores de la descomposición. Alguien tiene que evitarlo.

Aun si la doctrina gubernamental frente a la crisis partiera del diagnóstico correcto, y prescribiera las medidas indicadas, hoy se enfrenta al formidable e imbatible escollo de la incredulidad de sus destinatarios. Una política es, en cierto modo, un diálogo, en que los interlocutores deben hablarse y entenderse. Hoy ni siquiera los mercados, como se dice en el lenguaje de la tecnocracia, confían en la palabra gubernamental. Menos lo hace la gente común. Es preciso, por lo tanto, introducir un nuevo interlocutor en ese diálogo. Los legisladores deben serlo. Los diputados deben frenar una política que genera efectos letales, plenamente comprobables, y propiciar la adopción de medidas alternativas, que siquiera sirvan para no reiterar actitudes y conductas que ya mostraron su ineficacia. Allí se lo haya si no identifican su responsabilidad y la ejercen a plenitud.

CAJÓN DE SASTRE

Ayer inició sus trabajos formales, en Guadalajara, la asociación Nuevo Jalisco, un espacio con vocación regional destinado a la reflexión y la acción política, alentado entre otros por el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. La nueva configuración de la política jalisciense, con el predominio de Acción Nacional, y la depresión de otras fuerzas sociales, ha hecho evidente a los ojos de quienes impulsan este esfuerzo, la necesidad de animar el debate público y el desarrollo de la vida institucional.

El secretario de Hacienda explicará y defenderá hoy ante la Cámara de Diputados una política económica que por donde quiera que se la vea sólo muestra defectos e insuficiencias, a pesar de lo cual se insiste en mantenerla vigente.